



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1334

1 de Junio de 2018

PROYECTO PRO INVERSIÓN

BOLETÍN 11747-03

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1334

1 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE

PROYECTO PRO INVERSIÓN

BOLETÍN 11747-03

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	8
COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICOS.....	11
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.....	16
ANEXO I.....	31
ANEXO II.....	34

PROYECTO PRO INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11747-03

REFERENCIA	Perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	Del Interior y Seguridad Pública, De Defensa Nacional, De Hacienda, De Economía, Fomento y Turismo, De Obras Públicas, De Vivienda y Urbanismo, De Minería, De Energía, Del Medio Ambiente y Secretaría General de la Presidencia
INGRESO	16 de mayo de 2018
ARTICULADO	Ocho artículos permanentes y un transitorio; los artículos permanentes modifican, respectivamente, la ley Bases Generales del Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Código de Procedimiento Civil, el decreto ley sobre Concesiones Marítimas, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Código de Aguas, la Ley de Rentas Municipales y la Ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD


En los últimos cuatro años, diversas reformas y políticas públicas generaron un efecto negativo en nuestra capacidad de crecer y generar empleos, generando un freno en la inversión y en el emprendimiento. Como resultado de ello, Chile creció un 1,8% promedio anual, es decir, casi la mitad del crecimiento promedio a escala mundial. Esto lo demuestra claramente el ranking de competitividad global del World Economic Forum, en el que Chile ha caído 11 puestos en los últimos quince años.

Asimismo, la OCDE ha calificado a Chile como uno de los países más burocráticos en cuanto al número de permisos que se exigen para los proyectos de inversión, lo que evidentemente causa un impacto negativo en los inversionistas.

En este contexto, y con vistas a retomar la senda del crecimiento, es que el Gobierno decidió impulsar una Agenda Pro Inversión, que pretende revitalizar la economía chilena y vigorizar el crecimiento del empleo, especialmente el de calidad, la cual contiene varias iniciativas, algunas propias de materias de ley, otras de la potestad reglamentaria, y otras tales como la suscripción de convenios con la OCDE, que tienen por objeto reglamentar una colaboración o alianza en materia de simplificación normativa, entre otras. Al amparo de dicha agenda, surge precisamente el proyecto de ley en análisis que modifica diversos textos legales, para promover la inversión.

En particular, la abundancia de trabas regulatorias, los procedimientos burocráticos, la incertidumbre jurídica y, finalmente, el aumento de la judicialización generan efectos negativos en la inversión. Esto porque se traducen en pérdidas innecesarias de tiempo y recursos; en barreras a la entrada a emprendedores y aquellos que buscan desarrollar sus potencialidades productivas; en reducción de la transparencia; en incertidumbre en los procesos, todo lo cual confluye en la disminución de proyectos que se realicen en Chile, reduciendo finalmente la competitividad de la economía.

En este escenario, y sin perjuicio de algunos comentarios específicos a ciertas modificaciones que se vienen proponiendo en la iniciativa legal, las medidas incorporadas en el proyecto de ley que simplifican y agilizan los procesos y que eliminan las incertezas jurídicas, van en la dirección correcta, pero es necesario avanzar más aún en esta dirección. Este es un buen comienzo, sin perjuicio de otras iniciativas más sustantivas que entendemos están siendo consideradas por el Gobierno para fortalecer la inversión, competitividad y productividad de nuestra economía.

Se espera que, tal como se indicó en el mensaje presidencial, el presente proyecto sea sólo el principio de una serie de iniciativas que vendrán más adelante 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto introduce modificaciones a diversos textos legales, con el objeto de simplificar procedimientos, disminuir plazos de tramitación y costos asociados, eliminar incertezas jurídicas y mejorar la información disponible para los inversionistas mineros.

En concreto, el proyecto se refiere a las materias que a continuación se indican, cuyo contenido se señala en su aspecto más esencial:

Medio ambiente

- Se faculta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir aquella parte de los pronunciamientos de organismos del Estado que no estuvieren fundados, o que excedieren la competencia del respectivo organismo.
- Los interesados podrán dirigirse al SEA para solicitar un pronunciamiento previo sobre si un determinado proyecto debe o no someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); la respuesta del Servicio es vinculante y produce efectos obligatorios.
- Respecto de las generadoras de energía eléctrica, se elimina el límite legal actualmente contemplado para someterse al SEIA (3 megavatios). Será el Reglamento del SEIA el que determinará los proyectos que deberán someterse al sistema de acuerdo a la magnitud del mismo, dependiendo del tipo de tecnología.
- No se podrán imponer condiciones o exigencias, por parte de organismos del Estado, que sean adicionales a la resolución de calificación ambiental, una vez otorgados los permisos sectoriales ambientales.
- Se establece que el plazo de 5 años de caducidad de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se contará a partir de la notificación de la misma o desde la notificación de la última resolución de recursos judiciales o administrativos interpuestos.
- Se establece que los planes de prevención y descontaminación puedan distinguir tipos de fuentes por razones ambientales, para efectos de fijar la proporción en que deberán reducir las emisiones.

Minería

Se establecen medidas para mantener actualizado el catastro minero nacional. En este sentido, se permite al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) utilizar las publicaciones de los Boletines Oficiales de Minería.

Denuncia de obra nueva (procedimiento civil)

Se regula la medida de suspensión de obra nueva, reemplazando su otorgamiento de oficio y con el sólo mérito de la presentación de la demanda, estableciendo, al igual que en toda medida precautoria, que su otorgamiento dependerá del requerimiento de parte, y siempre que el solicitante acredite la posesión que se invoca y el peligro grave e inminente en su demora. Asimismo, se permite suspender la medida de suspensión, si se otorga caución suficiente.

Concesiones marítimas

Se permite constituir garantía sobre la concesión marítima y sobre los bienes propios del concesionario, destinados a su explotación.

Proyectos de construcción

- Se adapta la normativa para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación.
- Se dispone que las Direcciones de Obras Municipales deberán publicar en la plataforma digital dispuesta al efecto y en el sistema de información regulado por la ley de transparencia del mercado del suelo, las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos para la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, en un plazo que no debe exceder los tres días hábiles desde su otorgamiento.
- Tratándose de proyectos que afecten el interés general de la comunidad será necesario publicar el permiso en el Diario Oficial dentro de los diez días posteriores a su otorgamiento, momento a partir del cual se presumirá de derecho conocido por todos. Se entenderá que afectan al interés general los edificios de uso público y los demás proyectos que determine la Ordenanza General.

Aguas

- La Dirección General de Aguas (DGA) dispondrá de un sistema informático para recibir y tramitar digitalmente toda presentación de cualquiera cuestión o controversia sometida a su conocimiento, relacionada con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.

- Se externaliza el trámite de recepción de obras hidráulicas para los proyectos de gran envergadura, a través de revisores externos, inscritos en el Registro de la DGA, que serán solidariamente responsables con el titular de la obra.
- Se flexibilizan los procedimientos de aprobación en casos que las obras no coincidan con los puntos de captación y/o de la restitución de las aguas aprobados originalmente, permitiendo que la DGA pueda corregir errores georeferenciales que se produzcan en las resoluciones.
- Se establece un plazo máximo para la recepción de los informes requeridos a la Dirección de Obras Hidráulicas para obras de regularización o defensa de cauces naturales, estableciendo, en caso de transcurrir el plazo fijado sin recibir el informe, el deber de la DGA de resolver las solicitudes de permiso con los antecedentes con que cuente.
- Se acepta la posibilidad de solicitar que la inspección ocular de las obras de captación o de restitución, sea realizada por un revisor independiente, que se encuentre inscrito en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas; los revisores independientes serán solidariamente responsables con el titular de la obra por los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos en su diseño.

Patentes municipales

Las municipalidades deberán otorgar de manera inmediata patente provisoria por un plazo de dos años, pudiendo los establecimientos comenzar a funcionar desde su otorgamiento, siempre que cuenten con autorización sanitaria otorgada o solicitada, según el caso.

Órganos del Estado

Los órganos del Estado podrán celebrar convenios interadministrativos, de carácter obligatorio, cuyo incumplimiento constituirá infracción al deber de probidad ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

CONTEXTO ECONÓMICO

En los últimos cuatro años (2014-2017) se ha observado un crecimiento negativo de la inversión en Chile, explicado principalmente por las decisiones de invertir del sector empresarial, principal determinante de la inversión en Chile. El aporte de la inversión de gobierno, en tanto, ha sido acotado considerando que presenta una baja participación del PIB (algo de más del 2% del PIB).

Actualmente hay una cartera de proyectos privados de inversión evaluados en torno a US\$65 mil millones¹ para el período 2018-21. Sin embargo, y como punto de referencia, la SOFOFA estimó que a fines del 2016, había 43 iniciativas de inversión valoradas en US\$57.870 millones para el quinquenio 2017-21 que se encontraban detenidas por distintos motivos², entre los que se encuentran: trabas regulatorias, procedimientos burocráticos, aumento de la judicialización, etc.

Adicionalmente, aun cuando Chile continúa posicionándose como uno de los primeros de la región en términos de distintos rankings internacionales relacionados con el desarrollo, hemos ido alejándonos sostenidamente de los máximos alcanzados alguna vez por nuestra economía. En particular, esto se observa claramente con el retroceso de 11 puestos en los últimos 15 años en el ranking de competitividad

global (WEF) o en el alejamiento en los últimos años de la “frontera”, la cual representa el mejor desempeño observado en todas las economías de la muestra captado por el indicador Doing Business (Banco Mundial). Estos retrocesos en los rankings se explica, en parte, por la implementación de medidas internas erradas, y en parte, por el avance más acelerado de otros países producto de la implementación de políticas más adecuadas.

En consecuencia, con motivo de la disminución del potencial de crecimiento de nuestro país en los últimos años, y a fin de retomar la senda del crecimiento, surge la promoción de una Agenda Pro Inversión y este proyecto de ley.

AGENDA PRO INVERSIÓN

En relación con el proyecto de ley en informe, pero sin incidencia directa en él, y con el objeto de revitalizar la economía chilena y vigorizar el crecimiento del empleo, especialmente de calidad, el Gobierno decidió impulsar una Agenda Pro Inversión que contempla la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que estará a cargo de coordinar a los ministerios y sus respectivos servicios a fin de mejorar el proceso de aprobación y entrega de los permisos necesarios, sin desatender el cumplimiento de los requisitos establecidos en nuestra normativa.

1 De acuerdo al último catastro de la CBC (abril 2018).

2 Catastro de Proyectos de Inversión. Edición 2017.

Asimismo, esta Agenda Pro Inversión contempla la presentación de iniciativas legales que perfeccionen el ordenamiento jurídico, eliminando trabas regulatorias; un mandato a la Comisión Nacional de Productividad para una revisión regulatoria en sectores claves de nuestra economía; la firma de un convenio OECD para la simplificación normativa y de permisos de inversión; promoción activa de la inversión extranjera; y un programa de alineamiento para que las entidades públicas trabajen coordinadamente en sus decisiones y estrategias y se focalicen en torno al objetivo de alcanzar el crecimiento sostenible y sustentable de nuestra economía.

EL PROYECTO DE LEY

El proyecto ingresado hace algunas semanas por el Ejecutivo es sólo el principio de una serie de iniciativas para fortalecer la inversión, competitividad y productividad de nuestra economía.

Con él, se intenta perfeccionar el ordenamiento jurídico, equilibrando la certeza jurídica con la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de los proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

- **Disminuir plazos de tramitación, reduciendo el costo asociado.** Por eso, las modificaciones buscan simplificar procedimientos, eliminando requisitos innecesarios, así como se pone a disposición de los inversionistas sistemas digitales para recibir y tramitar permisos, entre otros, y se permite la externalización de servicios de revisión a fin

de reducir los tiempos de tramitación de los proyectos hasta su puesta en marcha.

- **Eliminar incertezas jurídicas.** Se busca evitar interpretaciones ambiguas y espacios de discrecionalidad infundada. Para ello, se regulan algunos procedimientos que adolecen de vacíos que dificultan su aplicación y se perfeccionan con la claridad necesaria, los ámbitos de competencia de los distintos servicios públicos involucrados.
- **Mejorar la información disponible para los inversionistas mineros,** buscando con ello que el mercado de la inversión minera sea más transparente, competitivo y moderno.

El retroceso que ha experimentado Chile en distintos indicadores ha ido de la mano de la evaluación generalizada de que la economía chilena ha ido perdiendo competitividad y potencialidad. Las causas son variadas, pero claramente la modernización del Estado, particularmente la administración pública, es fundamental —pero no suficiente— para la solución de este problema. Esta modernización incluye la búsqueda permanente de la mejora de la manera como las instituciones públicas cumplen con sus responsabilidades, en particular las relacionadas con temas del servicio civil, del diseño y funcionamiento de entes reguladores, de descentralización, de gestión pública, de transparencia y de participación ciudadana.

En particular, abundancia de trabas regulatorias, procedimientos burocráticos, incertidumbre jurídica y, finalmente, aumento de la judicialización generan efectos negativos en la inversión. Esto porque se traducen en pérdidas innecesarias de tiempo y recursos; en barreras a la entrada a emprendedores y aquellos que buscan desarrollar sus potencialidades productivas; en reducción de la transparencia; en incertidumbre en los procesos,

todo lo cual confluye en la disminución de proyectos que se realicen en Chile, reduciendo finalmente la competitividad de la economía.

Esto mismo ha sido reconocido por el Banco de Desarrollo de América Latina. En un intento por identificar las causas del éxito de los distintos programas de inversión que han impulsado varios países de América Latina, se ha reconocido que uno de los factores preponderantes para garantizar el éxito de estos programas es el compromiso del sector público para invertir recursos financieros, tiempo y capital humano especializado en impulsar reformas para simplificación de procedimientos administrativos vinculados a la actividad productiva.³

Específicamente, cobra gran relevancia en las modificaciones propuestas la simplificación de

los procesos y la incorporación de la tecnología y digitalización de trámites y solicitudes, las que tienen un rol clave en la modernización.

En este escenario, las medidas incorporadas en el proyecto de ley que simplifican y agilizan los procesos y que eliminan las incertezas jurídicas, van en la dirección correcta, pero es necesario avanzar más aún en esta dirección. Este es un buen comienzo, sin perjuicio de otras iniciativas más sustantivas que entendemos están siendo consideradas por el Gobierno para fortalecer la inversión, competitividad y productividad de nuestra economía.

Se espera que, tal como se indicó en el mensaje presidencial, el presente proyecto sea sólo el principio de una serie de iniciativas que vendrán más adelante ■■■■

3 "El uso de las TIC para la simplificación de barreras administrativas a la inversión. Casos exitosos en América Latina." Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 1 / 2011, Banco de Desarrollo de América Latina.

V. COMENTARIOS DE MÉRITO EN ESPECÍFICO

PROYECTO DE LEY (PRECEPTOS QUE MERECE COMENTARIOS)	NOTAS O COMENTARIOS
<p>Nuevo artículo 9 quáter de la ley 19.300:</p> <p><i>Los proponentes o titulares de proyectos podrán dirigirse al Director Ejecutivo del Servicio o el Director Regional, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, podrán dirigirse los proponentes o titulares a las mismas autoridades, en caso que requieran modificar un proyecto, sea que cuente con una Resolución de Calificación Ambiental favorable, o en el caso que el proyecto no tenga la respectiva resolución.</i></p> <p><i>El pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental.</i></p>	<p>Es muy positiva la proposición de permitir la consulta previa al Servicio de Evaluación ambiental sobre la procedencia de someter o no un proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.</p> <p>También es importante lo que establece el inciso final del artículo, en cuanto a que lo que resuelva el Servicio tiene carácter vinculante.</p> <p>En este sentido importa precisar que el carácter obligatorio de la respuesta produce efectos tanto si es positiva como negativa. Es decir, si se responde que no debe estar sujeto al SEIA, no podría otra autoridad estimar lo contrario. También interesaría determinar si en ese mismo caso se encontraría otro particular.</p>
<p>La nueva letra c) del artículo 9° de la misma ley, señala que quedan afectos al SEIA las "centrales o plantas de energía eléctrica en base a magnitudes dependiendo del tipo de tecnología".</p>	<p>Es muy importante hacer intervenir al tipo de tecnología empleada, pues las tecnologías limpias deberían tener un tratamiento más favorable que las de otro tipo.</p> <p>No obstante, la norma parece poco clara en cuanto a su significado y alcance, tal como está formulada, pues no se observa un elemento objetivo para su aplicación.</p> <p>Con todo, la norma propuesta es preferible a la vigente, que hace ingresar al SEIA a las centrales</p>

PROYECTO DE LEY (PRECEPTOS QUE MERECE COMENTARIOS)	NOTAS O COMENTARIOS
	<p>eléctricas con producción superior a 3 megavatios, sin otra consideración. Pero esta norma –vigente– tiene la virtud de ser clara y objetiva.</p>
<p>Nuevo inciso cuarto del artículo 24 de la ley 19.300:</p> <p><i>La resolución de calificación ambiental otorgará los permisos ambientales sectoriales, sin que se puedan imponer condiciones o exigencias adicionales a las establecidas en la resolución señalada, mediante otro acto de autoridad distinto al Servicio de Evaluación Ambiental y/o de la Comisión de Evaluación. Dicho Servicio, durante la evaluación ambiental del proyecto o actividad, requerirá el pronunciamiento de aquellos organismos competentes en las materias relativas al permiso ambiental sectorial respectivo, a efectos de velar por el cumplimiento de los requisitos y contenidos del permiso de que se trate.</i></p>	<p>Este nuevo inciso es clave en el contexto de las modificaciones en materia ambiental y debería mantenerse hasta la total tramitación del proyecto de ley.</p> <p>Es lo que da seguridad a quienes hubieren cumplido con las condiciones y exigencias legalmente impuestas, de modo tal que una vez cumplidas, no se pueda volver atrás por nuevas alegaciones sobre el proyecto.</p>
<p>Nuevo inciso segundo del artículo 565 del Código de Procedimiento Civil:</p> <p><i>Cualquiera sea el caso, y siempre que la naturaleza de la obra lo permita, la suspensión de la misma se limitará estrictamente a aquella parte de la obra nueva que se emplace en terrenos cuya posesión o servidumbre invoque el denunciante, de conformidad a las normas del</i></p>	<p>El procedimiento sobre denuncia de obra nueva intenta resolver un conflicto de intereses actual e inminente entre dos personas: la que ha iniciado una nueva construcción y la que se considera afectada por esa causa.</p> <p>Las causales para hacer la denuncia vienen en el Código Civil y se han anotado a pie de página, pueden reducirse a la construcción el suelo ajeno, a la que impide el ejercicio de una servidumbre, y las que sobrepasan por elevación la línea divisoria de un predio.</p> <p>La novedad y pertinencia de la modificación propuesta, consiste en reducir los efectos de la denuncia, en caso de ser acogida, a la parte que esté en conflicto con los derechos del denunciante, pero sin decretar la suspensión de la obra completa.</p>

PROYECTO DE LEY (PRECEPTOS QUE MERECE COMENTARIOS)	NOTAS O COMENTARIOS
<p>presente párrafo y a los artículos 930⁴ y 931⁵ del Código Civil.</p>	<p>Parece una norma de sano sentido común.</p>
<p>Nuevo artículo 6 bis de la ley de concesiones marítimas: Artículo 6°bis. - El concesionario podrá dar en garantía la concesión y sus bienes propios destinados a la explotación de ésta.</p> <hr/> <p>4 Art. 930. El poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión.</p> <p>Pero no tendrá el derecho de denunciar con este fin las obras necesarias para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, acequia, etc., con tal que en lo que puedan incomodarle se reduzcan a lo estrictamente necesario, y que, terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior, a costa del dueño de las obras.</p> <p>Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos conducentes a mantener la debida limpieza en los caminos, acequias, cañerías, etc.</p> <p>5 Art. 931. Son obras nuevas denunciabiles las que construidas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en él.</p> <p>Son igualmente denunciabiles las construcciones que se trata de sustentar en edificio ajeno, que no esté sujeto a tal servidumbre.</p> <p>Se declara especialmente denunciabie toda obra voladiza que atraviesa el plan vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no se apoye sobre el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias sobre él.</p>	<p>Es de toda razonabilidad la norma propuesta. La concesión es un bien jurídico ingresado al patrimonio de su titular, de manera que facultarlo para darlo en garantía parece lógico.</p> <p>Pero ¿de qué garantía se trata? Ello dependerá de la consideración sobre la calidad de mueble o inmueble del bien.</p> <p>Respecto de la ejecución de la garantía en caso de que el deudor no pague su crédito, se entiende que se realizaría según las normas generales, esto es, mediante pública subasta, otorgando al adjudicatario la calidad de continuador de la concesión marítima (por ejemplo, un establecimiento de acuicultura).</p> <p>Sería preferible contar con mayor información sobre estos aspectos e incluirlos, al menos sucintamente, en la nueva disposición.</p>

PROYECTO DE LEY (PRECEPTOS QUE MERECE COMENTARIOS)	NOTAS O COMENTARIOS
<p>Nuevo Artículo 116 bis C) de la Ley General de Urbanismo y Construcciones:</p> <p><i>Tratándose de proyectos que afecten el interés general de la comunidad será necesario publicar el permiso en el Diario Oficial dentro de los diez días posteriores a su otorgamiento, momento a partir del cual se presumirá de derecho conocido por todos.</i></p> <p><i>Se entenderá que afectan al interés general los edificios de uso público y los demás proyectos que determine la Ordenanza General</i></p>	<p>La presunción de derecho sobre el conocimiento de un proyecto que afecte el interés general, es un elemento que da certeza tanto al inversor o constructor como a quienes asuman el interés de la comunidad.</p> <p>Lo que podría ser opinable es la remisión a la Ordenanza General para determinar en qué casos se afecta el interés general. Podría sugerirse que los elementos esenciales de esta norma, quedaran expresadas en el nivel legal, sin perjuicio de su desarrollo en el plano reglamentario.</p>
<p>Nuevo inciso segundo del artículo 152 del Código de Aguas:</p> <p><i>Si no se presentaren oposiciones o si éstas fueren desechadas, el solicitante presentará a la Dirección General de Aguas el proyecto que comprenderá planos, memorias y otros antecedentes justificativos. <u>La evaluación y pre-revisión del proyecto podrá ser realizada, a cargo del solicitante, por revisores independientes que se encuentren inscritos en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas. Los revisores independientes serán solidariamente responsables con el titular de la obra por los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos en su diseño.</u> Este servicio aprobará, si procede, el proyecto presentado y fijará los plazos en que las obras deberán iniciarse y terminarse.</i></p>	<p>Según la nueva norma, lo que se pretende es externalizar el trámite de las inspecciones oculares y trámite de aprobación de obras, facilitando así los procedimientos administrativos para la adquisición o ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas, que actualmente tienen un tiempo promedio de resolución de 2,3 años.</p> <p>Sin embargo, merece una mayor reflexión la responsabilidad solidaria que se les impone a los revisores independientes, puesto que con ello se genera un notorio desincentivo para registrarse como revisor independiente, de tal modo que la iniciativa puede quedar en letra muerta.</p>

PROYECTO DE LEY (PRECEPTOS QUE MERECE COMENTARIOS)	NOTAS O COMENTARIOS
<p>Nuevos incisos tercero y cuarto del artículo 295 del Código de Aguas:</p> <p><i>La recepción de las obras también podrá ser realizada, a cargo del solicitante, por revisores independientes que se encuentren inscritos en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas.</i></p> <p><i>Los revisores independientes serán solidariamente responsables con el titular de la obra por los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos en su construcción.</i></p>	<p>Los nuevos incisos externalizan el trámite de recepción de obras hidráulicas, trámite o permiso que hoy demora aproximadamente un tiempo promedio de 2,8 años. Lo que señala esta modificación es que el solicitante podrá escoger entre realizar el trámite a través de la DGA o a través de revisores externos (inscritos en la DGA), los cuales serán solidariamente responsables con el titular de la obra.</p> <p>Si bien, la intención de la norma es positiva en cuanto a agilizar la revisión de los proyectos, merece una mayor reflexión la responsabilidad solidaria que se le impone al revisor externo, por las mismas razones expresadas más arriba, respecto de los revisores independientes para inspecciones oculares y trámites de aprobación de obras.</p>

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente:

1. Incorpórase, en el artículo 9°⁶, el siguiente inciso final, nuevo:

“En caso que dichos pronunciamientos no sean fundados técnicamente o consideren materias que no son de competencia del respectivo órgano de la Administración del Estado, el Servicio, fundadamente, podrá revisar y, en su caso, omitir total o parcialmente aquella parte que no fuere fundada o que excedió el marco de las competencias otorgadas a dicho órgano, al momento de elaborar los informes que corresponda.”.

2. Incorpórase, el siguiente artículo 9° quáter, nuevo:

“Los proponentes o titulares de proyectos podrán dirigirse al Director Ejecutivo del Servicio o el Director Regional, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, podrán dirigirse los proponentes o titulares a las mismas autoridades, en caso que requieran modificar un proyecto, sea que cuente con una

6 Artículo 9° vigente;

Artículo 9°.- El titular de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda. Aquéllos no comprendidos en dicho artículo podrán acogerse voluntariamente al sistema previsto en este párrafo.

Las Declaraciones de Impacto Ambiental o los Estudios de Impacto Ambiental se presentarán, para obtener las autorizaciones correspondientes, ante la Comisión establecida en el artículo 86 o Comisión de Evaluación en que se realizarán las obras materiales que contemple el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, las Declaraciones o los Estudios de Impacto Ambiental deberán presentarse ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

En caso de dudas corresponderá al Director del Servicio de Evaluación Ambiental determinar si el proyecto o actividad afecta zonas situadas en distintas regiones, de oficio o a petición de una o más Comisiones de Evaluación o del titular del proyecto o actividad.

El proceso de revisión de las Declaraciones de Impacto Ambiental y de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental considerará la opinión fundada de los organismos con competencia ambiental, en las materias relativas al respectivo proyecto o actividad, para lo cual la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio, en su caso, requerirá los informes correspondientes.

Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias.

[...].

Resolución de Calificación Ambiental favorable, o en el caso que el proyecto no tenga la respectiva resolución.

El pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental.”

3. Reemplázase la letra c)⁷ del artículo 10, por la siguiente:

“c) Centrales o plantas de energía eléctrica en base a magnitudes dependiendo del tipo de tecnología.”

4. Agrégase a la letra a) del artículo 13 al inicio la siguiente frase: “Detalle de tipologías y”⁸.

5. Incorpórase, en el artículo 24, el siguiente nuevo inciso cuarto:

“La resolución de calificación ambiental otorgará los permisos ambientales sectoriales, sin que se puedan imponer condiciones o exigencias adicionales a las establecidas en la resolución señalada, mediante otro acto de autoridad distinto al Servicio de Evaluación Ambiental y/o de la Comisión de Evaluación. Dicho Servicio, durante la evaluación ambiental del proyecto o actividad, requerirá el pronunciamiento de aquellos organismos competentes en las materias relativas al permiso ambiental sectorial respectivo, a efectos de velar por el cumplimiento de los requisitos y contenidos del permiso de que se trate.”⁹.

7 Letra c) vigente, que se deroga:

Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:

- c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW;

- 8 La letra a) del artículo 13 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 13.- Para los efectos de elaborar y calificar un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, el proponente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los órganos de la administración del Estado competentes, en su caso, se sujetarán a las normas que establezca el reglamento.

Este reglamento será dictado mediante decreto supremo, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente, y contendrá, a lo menos, lo siguiente:

- a) Detalle de tipologías y lista de los permisos ambientales sectoriales, de los requisitos para su otorgamiento y de los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento;

- 9 El artículo 24 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 24.- El proceso de evaluación concluirá con una resolución que califica ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada.

Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes.

Si, en cambio, la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón

6. Agrégase, al final del inciso primero del artículo 25 ter, la frase “o desde la notificación de la última resolución de los recursos administrativos o judiciales que se hubieren interpuesto, en su caso.”¹⁰.
7. Elimínase, al final de la letra f) de artículo 45, la frase “la que deberá ser igual para todas ellas”¹¹.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Introdúcense las siguientes modificaciones al numeral 6 del artículo 2° del Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería:

1. Incorpórase, entre la frase “catastro minero nacional” y la frase “y el rol de minas del país”, la frase “de concesiones mineras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 241¹² del Código de Minería;”.

de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario.

La resolución de calificación ambiental otorgará los permisos ambientales sectoriales, sin que se puedan imponer condiciones o exigencias adicionales a las establecidas en la resolución señalada, mediante otro acto de autoridad distinto al Servicio de Evaluación Ambiental y/o de la Comisión de Evaluación. Dicho Servicio, durante la evaluación ambiental del proyecto o actividad, requerirá el pronunciamiento de aquellos organismos competentes en las materias relativas al permiso ambiental sectorial respectivo, a efectos de velar por el cumplimiento de los requisitos y contenidos del permiso de que se trate.

Los organismos del Estado a los que corresponda otorgar o pronunciarse sobre los permisos ambientales sectoriales a que se refiere esta ley, deberán informar a la Superintendencia del Medio Ambiente cada vez que se les solicite alguno de ellos, indicando si ha adjuntado o no una resolución de calificación ambiental y los antecedentes que permitan identificar al proyecto o actividad e individualizar a su titular.

En los casos que la Superintendencia detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo a esta ley deba ser objeto de una evaluación de impacto ambiental previa y que no cuenta con la respectiva resolución de calificación ambiental aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al Servicio de Evaluación Ambiental.

El titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del mismo, deberá someterse estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental respectiva.

- 10 El artículo 25 ter quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 25 ter.- La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación, o desde la notificación de la última resolución de los recursos administrativos o judiciales que se hubieren interpuesto, en su caso.

El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo.

- 11 La letra f) del artículo 45 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 45.- Los planes de prevención y descontaminación contendrán, a lo menos:

- f) La proporción en que deberán reducir sus emisiones las actividades responsables de la emisión de los contaminantes a que se refiere el plan, ~~la que deberá ser igual para todas ellas;~~

- 12 Artículo 241.- El Servicio llevará el Catastro Nacional de Concesiones Mineras. Para facilitar su confección, el Servicio mantendrá un Registro Nacional de éstas, en el cual se incluirán, entre otras menciones, las coordenadas U.T.M. de las concesiones cuyos vértices estén determinados en tales coordenadas.

Deben incluirse en el citado registro tanto las concesiones constituidas con arreglo a ese sistema de coordenadas, como aquellas -constituidas de acuerdo con un sistema diferente- cuyos vértices pasen a quedar determinados en coordenadas U.T.M.

2. Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo:

“Para mantener actualizado el catastro minero nacional de concesiones mineras, el Servicio podrá considerar las publicaciones que se practiquen durante el proceso de constitución de concesiones mineras.”¹³.

ARTÍCULO TERCERO.-

Introdúcense las siguientes modificaciones al párrafo 3 del Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sobre la denuncia de obra nueva:

1. Para modificar el artículo 565 como se indica:

- a) Sustitúyese la locución que inicia con la expresión “el juez decretará” y termina con la palabra “citar”, ambas incluidas, por la siguiente:

“el denunciante podrá solicitar, en dicho libelo o en cualquier momento, como medida precautoria, la suspensión provisional e inmediata de la obra, acompañando antecedentes que justifiquen la existencia de la posesión que se invoca y el peligro grave e inminente que entrañare el no otorgamiento de la misma. En la resolución que provea la demanda, el tribunal mandará a citar”.

- b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo:

“Cualquiera sea el caso, y siempre que la naturaleza de la obra lo permita, la suspensión de la misma se limitará estrictamente a aquella parte de la obra nueva que se emplace en

El registro se llevará considerando exclusivamente las copias que los conservadores deben enviar al Servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.

13 El N°6 del artículo 2° quedaría con la siguiente redacción:

ARTICULO 2° Corresponderá al Servicio Nacional de Geología y Minería:

6.- Levantar y mantener el catastro minero nacional de concesiones mineras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 241 del Código de Minería y el rol de minas del país; ejecutar las mensuras de las pertenencias y concesiones mineras de acuerdo con el inciso primero del artículo 52° del Código de Minería, e informar sobre problemas técnicos que se presenten relativos a su ubicación.

Para mantener actualizado el catastro minero nacional de concesiones mineras, el Servicio podrá considerar las publicaciones que se practiquen durante el proceso de constitución de concesiones mineras.

terrenos cuya posesión o servidumbre invoque el denunciante, de conformidad a las normas del presente párrafo y a los artículos 930¹⁴ y 931¹⁵ del Código Civil.”¹⁶.

2. Incorpórase un nuevo artículo 565 bis del siguiente tenor:

“Artículo 565 bis. La suspensión provisoria de la obra, podrá ser otorgada de plano por el tribunal, sobre la base de los antecedentes acompañados, o reservar su resolución para la audiencia a que se refiere el artículo anterior.

El tribunal, al decretar la medida del inciso anterior, dispondrá que se tome razón del estado y circunstancias de la obra y que se aperciba al que la esté ejecutando con la demolición o destrucción, a su costa, de lo que en adelante se haga.

En cualquier tiempo, el tribunal a petición de parte deberá hacer cesar la medida, en los casos dispuestos por el artículo 301¹⁷.”.

3. Para incorporar un nuevo artículo 568 bis del siguiente tenor:

“En la audiencia referida en el artículo 565, el tribunal se pronunciará sobre el otorgamiento de la medida precautoria, si esto no ha ocurrido, o bien sobre su mantención, sustitución o alzamiento, si la misma ya hubiere sido concedida.

14 Art. 930. El poseedor tiene derecho para pedir que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión.

Pero no tendrá el derecho de denunciar con este fin las obras necesarias para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, acequia, etc., con tal que en lo que puedan incomodarle se reduzcan a lo estrictamente necesario, y que, terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior, a costa del dueño de las obras.

Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos conducentes a mantener la debida limpieza en los caminos, acequias, cañerías, etc.

15 Art. 931. Son obras nuevas denunciabiles las que construidas en el predio sirviendo embarazan el goce de una servidumbre constituida en él.

Son igualmente denunciabiles las construcciones que se trata de sustentar en edificio ajeno, que no esté sujeto a tal servidumbre.

Se declara especialmente denunciabie toda obra voladiza que atraviesa el plan vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no se apoye sobre el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias sobre él.

16 El artículo 565 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 565. (722). Presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva denunciabie, el denunciante podrá solicitar, en dicho libelo o en cualquier momento, como medida precautoria, la suspensión provisional e inmediata de la obra, acompañando antecedentes que justifiquen la existencia de la posesión que se invoca y el peligro grave e inminente que entrañare el no otorgamiento de la misma. En la resolución que provea la demanda, el tribunal mandará a citar al denunciante y al denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil después de la notificación del demandado, debiendo en ella presentarse los documentos y demás medios probatorios en que las partes funden sus pretensiones.

Cualquiera sea el caso, y siempre que la naturaleza de la obra lo permita, la suspensión de la misma se limitará estrictamente a aquella parte de la obra nueva que se emplace en terrenos cuya posesión o servidumbre invoque el denunciante, de conformidad a las normas del presente párrafo y a los artículos 930 y 931 del Código Civil.

17 Art. 301 (291). Todas estas medidas son esencialmente provisionales. En consecuencia, deberán hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes.

El tribunal podrá decretar la suspensión de la medida precautoria si el denunciado consigna en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para responder de la demolición o destrucción de la obra o de la indemnización de los perjuicios que, de continuarla, pudieran seguirse al denunciado, en caso que a ello sea condenado por sentencia firme, según corresponda.

Para estos fines, dentro del plazo de tres días a contar de la fecha de la realización de la audiencia, el juez fijará prudencialmente y sin audiencia de peritos el monto de la caución antes referida. La suspensión de los efectos de la orden de paralización o suspensión de obras tendrá lugar automáticamente, desde el momento en que se consigne el monto de la referida caución en el tribunal y así se certifique en el expediente por el secretario.

Las cuestiones que se susciten en relación al monto de la caución fijada por el juez se tramitarán como incidente, lo que en todo caso no afectará la sustitución de la orden de suspensión de las obras si el denunciado hubiere consignado la caución inicialmente fijada por el juez. En caso que en la tramitación del incidente se solicite el informe de peritos, el juez procederá a designar al perito y los gastos y honorarios que se originen serán de cargo del denunciado. Con todo, si el denunciante ha sido vencido en el juicio, será condenado al pago del costo del peritaje señalado, sin perjuicio del pago de las demás costas a las que pueda ser condenado conforme las reglas generales.

Si al fallar el incidente se determina como monto de la caución una cantidad mayor a la inicialmente fijada, el denunciado deberá consignar dentro de quinto día la diferencia en el tribunal, so pena de levantarse la suspensión de la orden de suspensión. En caso que el monto de la caución sea menor al inicialmente fijado por el tribunal, el juez pondrá a disposición del denunciado el excedente dentro del plazo de tres días contado desde la respectiva resolución.”

4. Para sustituir en el artículo 569 inciso segundo, la expresión “se ratificará la suspensión provisional decretada o se mandará alzarla” por la siguiente: “el tribunal podrá decretar o ratificar la suspensión de obras u ordenar el alzamiento de la que ya se hubiere decretado”¹⁸.

18 El artículo 569 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 569. (726). Concluida la audiencia o presentado que sea el dictamen del perito, en su caso, el tribunal citará a las partes a oír sentencia, la que deberá dictar en el plazo de los tres días subsiguientes.

En la sentencia, el tribunal podrá decretar o ratificar la suspensión de obras u ordenar el alzamiento de la que ya se hubiere decretado dejando a salvo, en todo caso, al vencido el ejercicio de las acciones ordinarias que le competan, para que se declare el derecho de continuar la obra o de hacerla demoler.

Podrá, sin embargo, el tribunal, a petición de parte, ordenar en la misma sentencia la demolición, cuando estime que el mantenimiento aún temporal de la obra ocasiona grave perjuicio al denunciante y dé éste suficiente caución para responder por los resultados

La sentencia que ordene la demolición será apelable en ambos efectos.

En todo caso, la sentencia llevará condenación de costas.

5. Para modificar el artículo 570 como se indica:

- a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “se ratifica”, por la frase “en definitiva se decreta”.
- b) Intercálase entre el número 3ª y el inciso final, el siguiente inciso:

“Este derecho deberá ser ejercido por el denunciado dentro de los sesenta días de ejecutoriada la sentencia definitiva que hubiere acogido la denuncia.”¹⁹.

ARTÍCULO CUARTO.-

Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N° 340 de 1960, sobre Concesiones Marítimas, incorporando a continuación del artículo 6°, el siguiente artículo 6 bis, nuevo:

“Artículo 6 bis. - El concesionario podrá dar en garantía la concesión y sus bienes propios destinados a la explotación de ésta.”.

ARTÍCULO QUINTO.-

Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones:

1. Agrégase, en el artículo 12, a continuación de la expresión “la notificación administrativa del reclamante”, la expresión “o desde la fecha de la publicación de los actos administrativos en la plataforma digital dispuesta para dichos efectos, según corresponda”²⁰.

19 El artículo 570 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 570. (727). Si en definitiva se decreta la suspensión de la obra, podrá el vencido pedir autorización para continuarla, llenando las condiciones siguientes:

2a. Dar caución suficiente para responder de la demolición de la obra y de la indemnización de los perjuicios que de continuarla puedan seguirse al contendor, en caso que a ello sea condenado por sentencia firme; y

Este derecho deberá ser ejercido por el denunciado dentro de los sesenta días de ejecutoriada la sentencia definitiva que hubiere acogido la denuncia.

La primera de las condiciones expresadas y la calificación de la caución, serán materia de un incidente.

20 El artículo 12 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 12.- La Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá resolver las reclamaciones interpuestas en contra de las resoluciones dictadas por los Directores de Obras. El reclamo deberá ser interpuesto en el plazo de 30 días, contados desde la notificación administrativa del reclamante o desde la fecha de la publicación de los actos administrativos en la plataforma digital dispuesta para dichos efectos, según corresponda, aplicándose en este caso el procedimiento previsto en el artículo 118.

2. Modifícase el artículo 116 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso décimo, por el siguiente:

“La Dirección de Obras Municipales deberá publicar en la plataforma digital dispuesta al efecto y en el sistema de información regulado por la ley de transparencia del mercado del suelo las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo, en un plazo que no debe exceder los tres días hábiles desde su otorgamiento. Asimismo, deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina de dichas resoluciones, debiendo, además, informar mediante carta y/o correo electrónico adjuntando copia de tales actos administrativos al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos.”.

b) Agréganse los siguientes incisos undécimo, duodécimo, décimo tercero, y décimo cuarto, nuevos:

“Los permisos y certificados que deba otorgar el Director de Obras Municipales a que se refiere esta ley, deberán tramitarse en forma electrónica, sobre la base de una plataforma digital.

A través de la misma plataforma deberán tramitarse los reclamos que puedan presentarse ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en contra de los actos de las Direcciones de Obras Municipales.

La plataforma a que se refieren los incisos anteriores deberá entregar, en formato de datos abiertos, información acerca de la cantidad y tipo de solicitudes que se presenten en cada Dirección de Obras, su tiempo de tramitación y la identidad de los solicitantes.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, en los casos en que dicha plataforma presente problemas técnicos y no sea posible realizar la tramitación por esa vía, la Dirección de Obras Municipales deberá arbitrar las medidas necesarias para poder informar y notificar a los interesados en el respectivo procedimiento.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaborará un Reglamento que regulará el funcionamiento, uso y mantención de la plataforma digital a que se refiere este artículo.”²¹.

21 El artículo 116, con sus modificaciones, y dada su extensión, se incluye en el **ANEXO I**.

3. Reemplázase, el artículo 116 bis C²², por el siguiente:

“Artículo 116 bis C).- Tratándose de proyectos que afecten el interés general de la comunidad será necesario publicar el permiso en el Diario Oficial dentro de los diez días posteriores a su otorgamiento, momento a partir del cual se presumirá de derecho conocido por todos.

Se entenderá que afectan al interés general los edificios de uso público y los demás proyectos que determine la Ordenanza General.”.

ARTÍCULO SEXTO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Aguas:

1. Incorpórase, en el artículo 130²³, el siguiente inciso final, nuevo:

“Con todo, la Dirección General de Aguas podrá disponer de un sistema informático para recibir y tramitar digitalmente toda presentación de cualquiera cuestión o controversia sometida a su conocimiento en virtud de este párrafo. Un Reglamento fijará las condiciones aplicables a estas presentaciones.”.

2. Incorpórase, en el artículo 135²⁴, los siguientes incisos tercero y cuarto nuevo:

- 22 Artículo 116 bis C) vigente:

Artículo 116 bis C.- Aprobado por el Director de Obras Municipales un anteproyecto u otorgada una autorización para subdividir, o un permiso de edificación, de urbanización o de cambio de destino de un edificio existente, el propietario podrá informar al público sobre dicha gestión administrativa, para lo cual deberá comunicar por escrito a la Dirección de Obras Municipales que se acoge al procedimiento de publicidad que regula este artículo.

La Ordenanza General establecerá la forma, plazo y condiciones mediante las cuales se podrá informar al público, al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente de la aprobación a que alude el inciso anterior. Entre dichas medidas, se considerará la instalación de un letrero visible en el lugar de la obra, la comunicación por escrito a los vecinos afectados y la comunicación a través de algún medio masivo, como radio o periódico, de acuerdo a las características de los proyectos. En todo caso, se deberá contemplar, como último trámite, la obligación de publicar un aviso en el Diario Oficial, el cual dará a conocer a la comunidad las características esenciales de la actuación de que se trate, la que se presumirá de derecho conocida desde la publicación del mencionado aviso.

Transcurridos treinta días desde la publicación a que se refiere el inciso anterior, la Municipalidad, a petición de parte, emitirá un certificado en que deje constancia que, hasta la fecha de su emisión, no han ingresado reclamos ni se le han notificado judicialmente recursos que recaigan sobre la gestión publicitada.

- 23 Artículo 130 vigente:

Art. 130. Toda cuestión o controversia relacionada con la adquisición o ejercicio de los derechos de aprovechamiento y que de acuerdo con este Código sea de competencia de la Dirección General de Aguas, deberá presentarse ante la oficina de este servicio del lugar, o ante el Gobernador respectivo.

La presentación y su tramitación se efectuará de acuerdo a las disposiciones de este párrafo, sin perjuicio de las normas particulares contenidas en los párrafos siguientes.

[...].

- 24 Artículo 135 vigente:

“Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el interesado podrá, dentro del plazo establecido para consignar la suma señalada por la Dirección, solicitar que la inspección ocular sea realizada por un revisor independiente, que se encuentre inscrito en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas. Un Reglamento fijará los requisitos, inhabilidades e incompatibilidades que deben cumplirse para inscribirse y permanecer inscrito en dicho registro.

El interesado deberá acompañar el informe técnico de la inspección ocular, dentro del plazo de 30 días de realizado el trámite, bajo el apercibimiento de tener por desistida la solicitud.”.

3. Incorpórase en el inciso segundo del artículo 152, entre las frases “antecedentes justificativos.” y “Este servicio aprobará,” lo siguiente:

“La evaluación y pre-revisión del proyecto podrá ser realizada, a cargo del solicitante, por revisores independientes que se encuentren inscritos en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas. Los revisores independientes serán solidariamente responsables con el titular de la obra por los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos en su diseño.”²⁵.

Art. 135. Los gastos que irroguen las presentaciones ante la Dirección General de Aguas, serán de cargo del interesado y los que originen las medidas que dicha Dirección adopte de oficio, serán de cargo de ella.

Si la Dirección estimare necesario practicar inspección ocular, determinará y solicitará los medios y las condiciones necesarias para acceder al lugar y, en su caso, la suma que el interesado debe consignar para cubrir los gastos de esta diligencia. En caso de que el interesado no cumpla con dichas exigencias, la Dirección podrá denegar la solicitud de que se trate.

Para realizar dicha inspección, los funcionarios de la Dirección General de Aguas podrán, previa resolución del Servicio, ingresar a terrenos de propiedad privada, debiendo levantar acta y dejar registro de la diligencia.

[...].

[...].

- 25 El artículo 152 quedaría con la siguiente redacción:

ARTICULO 152°- La Dirección General de Aguas ordenará las publicaciones previstas en el artículo 131°.

Si no se presentaren oposiciones o si éstas fueren desechadas, el solicitante presentará a la Dirección General de Aguas el proyecto que comprenderá planos, memorias y otros antecedentes justificativos. La evaluación y pre-revisión del proyecto podrá ser realizada, a cargo del solicitante, por revisores independientes que se encuentren inscritos en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas. Los revisores independientes serán solidariamente responsables con el titular de la obra por los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos en su diseño. Este servicio aprobará, si procede, el proyecto presentado y fijará los plazos en que las obras deberán iniciarse y terminarse.

4. Incorpórase, en el artículo 156²⁶, el siguiente inciso final, nuevo:

“Si las obras no coincidieran con el punto preciso de la captación y/o de la restitución de las aguas determinados en la resolución que otorga el derecho de aprovechamiento, que reconoce el derecho de aprovechamiento o que aprueba su traslado, la Dirección, a solicitud de su titular, ajustará los puntos georreferenciados, en la medida que este ajuste no perjudique o menoscabe derechos de terceros. En caso contrario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 163²⁷.”.

5. Incorpóranse, en el artículo 295, las siguientes modificaciones:

- a) Reemplácese en el inciso primero la frase “otorgará la autorización” entre las palabras “Aguas” y “una”, por la frase “repcionará las obras”.
- b) Agrégase al final del inciso primero el siguiente texto:

“, que cumple con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y ha sido construida conforme a los planos y especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección General de Aguas conforme a lo dispuesto en el artículo 294²⁸.”.
- c) Incorpóranse, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos, tercero y cuarto, nuevos:

26 Artículo 156 vigente:

ARTICULO 156°- Terminadas las obras, el interesado comunicará este hecho a la Dirección.

Si las obras merecieran reparos, la Dirección General de Aguas ordenará que el interesado haga las modificaciones o las obras complementarias que determine dentro del plazo que fijará al efecto.

[...].

27 Art. 163. Todo traslado del ejercicio de los derechos de aprovechamiento en cauces naturales deberá efectuarse mediante una autorización del Director General de Aguas, la que se tramitará en conformidad al párrafo 1° de este Título.

Si la solicitud fuera legalmente procedente, no se afectan derechos de terceros y existe disponibilidad del recurso en el nuevo punto de captación, la Dirección General de Aguas deberá autorizar el traslado.

28 Art. 294°.- Requerirán la aprobación del Director General de Aguas, de acuerdo al procedimiento indicado en el Título I del Libro Segundo, la construcción de las siguientes Obras:

- a) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5m. de altura;
- b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo;
- c) Los acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten próximos a zonas urbanas, y cuya distancia al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros sobre la cota de dicho límite, y
- d) Los sifones y canoas que crucen cauces naturales.

Quedan exceptuados de cumplir los trámites y requisitos a que se refiere este artículo, los Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, los cuales deberán remitir los proyectos de obras a la Dirección General de Aguas dentro del plazo de seis meses contado desde la recepción final de la obra, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas.

“La recepción de las obras también podrá ser realizada, a cargo del solicitante, por revisores independientes que se encuentren inscritos en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas.

Los revisores independientes serán solidariamente responsables con el titular de la obra por los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos en su construcción.”²⁹.

6. Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 297, la frase “por la Dirección General de Aguas”, por la frase “en conformidad a las normas de este título”³⁰.

ARTÍCULO SÉPTIMO.-

Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, cuyo texto refundido y sistematizado se encuentra en el decreto ley N° 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior:

1. Reemplázase el inciso quinto, por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar de manera inmediata patente provisoria por un plazo de dos años, pudiendo los establecimientos comenzar a funcionar desde su otorgamiento. Para el otorgamiento de la patente provisoria se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación

- 29 El artículo 295 quedaría con la siguiente redacción:

ARTICULO 295°.- La Dirección General de Aguas recepionará las obras una vez aprobado el proyecto definitivo y siempre que haya comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas, que cumple con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y ha sido construida conforme a los planos y especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección General de Aguas conforme a lo dispuesto en el artículo 294.

Un reglamento especial fijará las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto, construcción y operación de dichas obras.

La recepción de las obras también podrá ser realizada, a cargo del solicitante, por revisores independientes que se encuentren inscritos en el Registro de Revisores Independientes que mantenga la Dirección General de Aguas.

Los revisores independientes serán solidariamente responsables con el titular de la obra por los daños y perjuicios que provengan de fallas, errores o defectos en su construcción.

- 30 El artículo 297 quedaría con la siguiente redacción:

Art. 297°.- Los que construyan las obras de que trata este título deberán constituir las garantías suficientes para financiar el costo de su eventual modificación o demolición, para que no constituyan peligro, si fueren abandonadas durante su construcción.

La garantía se constituirá a favor del Fisco y será devuelta una vez recibida la obra en conformidad a las normas de este título. En el caso de que sea abandonada durante su construcción, se restituirá el saldo de la garantía no aplicada a la ejecución de las obras de modificación o demolición. Para reiniciar las obras, deberá constituirse la garantía a que se refiere el inciso primero.

El Director General de Aguas podrá eximir de la obligación de constituir las garantías a que se refiere este artículo, tratándose de obras que ejecuten los Servicios Públicos o las Empresas del Estado, siempre que en el proyecto respectivo se contemplen las medidas tendientes a asegurar que en el caso de una eventual paralización de las obras éstas no constituirán peligro.

del Plan Regulador; b) Autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) Para el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el precitado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la autoridad sanitaria.”.

2. Agrégase un nuevo inciso sexto, pasando el actual inciso sexto a ser séptimo:

“Si transcurrido el plazo de dos años, contado desde el otorgamiento de la patente provisoria, los contribuyentes no cumplen con todas las exigencias que las disposiciones legales determinen para su funcionamiento, la Municipalidad deberá decretar la clausura del establecimiento.”.

3. Modifícase el actual inciso sexto, que ha pasado a ser séptimo, de la siguiente forma:

- a) Reemplázase la oración “Las municipalidades podrán otorgar patentes provisorias para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con los requisitos señalados en las letras b) y d) del inciso precedente, sin que sea necesario exigir la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto.”, por la siguiente: “En el caso que se otorgue una patente provisoria para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con el requisito señalado en la letra b) del inciso quinto, se podrá eximir la exigencia de la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto.”.
- b) Reemplázase la expresión “dentro de un plazo determinado, el cual no podrá exceder de un año contado desde la fecha en que se otorgue la patente provisoria”, por la siguiente: “dentro del plazo de vigencia de la patente provisoria”³¹.

31 El artículo 26, dada su extensión, se agrega con sus modificaciones, como **ANEXO II**.

ARTÍCULO OCTAVO.-

Modifícase la Ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el decreto con fuerza de ley N°1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de la siguiente forma:

1. Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 5°:

“Para los efectos del debido cumplimiento de los principios a los que se refiere el inciso anterior, todos los órganos del Estado señalados en el artículo primero³², podrán celebrar convenios interadministrativos, cualquiera sea su denominación, en los términos a que se refiere el Título II de esta Ley”³³.

2. Agrégase al artículo 38³⁴ los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, nuevos, pasando el actual inciso segundo³⁵ a ser inciso quinto:

“Asimismo, dos o más servicios públicos podrán celebrar los convenios que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus fines respectivos, previa aprobación por decreto suscrito por los ministros correspondientes, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Los convenios serán obligatorios para los servicios que concurran a él, y no podrán ser dejados sin efecto sino por mutuo acuerdo o por causas legales. Cuando corresponda, el cumplimiento de

32 Artículo 1°.- El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes.

La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.

33 El artículo 5° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 5°.- Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.

Para los efectos del debido cumplimiento de los principios a los que se refiere el inciso anterior, todos los órganos del Estado señalados en el artículo primero, podrán celebrar convenios interadministrativos, cualquiera sea su denominación, en los términos a que se refiere el Título II de esta Ley.

34 Artículo 38.- En aquellos lugares donde no exista un determinado servicio público, las funciones de éste podrán ser asumidas por otro. Para tal efecto, deberá celebrarse un convenio entre los jefes superiores de los servicios, aprobado por decreto supremo suscrito por los Ministros correspondientes. Tratándose de convenios de los servicios que se refiere el Artículo 30 [los servicios públicos regionales], éstos serán aprobados por resolución del respectivo Intendente.

[...].

[...].

[...].

35 NOTA: El texto vigente del artículo 38, según aparece en la Biblioteca del Congreso Nacional, solo tiene un inciso.

los convenios de que trata este artículo deberá ser incluido en los convenios de desempeño que suscriba el jefe superior.

Las discrepancias que surjan respecto a los términos del convenio o su ejecución serán resueltas conforme lo dispuesto en el artículo 39³⁶ de la presente ley. El incumplimiento del convenio constituirá una infracción al deber de probidad.”.

ARTÍCULO TRANSITORIO. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos de las Partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva en cada Partida.

36 Artículo 39.- Las contiendas de competencia que surjan entre diversas autoridades administrativas serán resueltas por el superior jerárquico del cual dependan o con el cual se relacionen. Tratándose de autoridades dependientes o vinculadas con distintos Ministerios, decidirán en conjunto los Ministros correspondientes, y si hubiere desacuerdo, resolverá el Presidente de la República.

ANEXO I

ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Artículo 116.- La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General.

Deberán cumplir con esta obligación las urbanizaciones y construcciones fiscales, semifiscales, de corporaciones o empresas autónomas del Estado y de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de Gendarmería de Chile.

Las construcciones destinadas a equipamiento de salud, educación, seguridad y culto, cuya carga de ocupación sea inferior a 1.000 personas, se entenderán siempre admitidas cuando se emplacen en el área rural y, en estos casos, para la obtención del permiso de edificación requerirán contar con el informe previo favorable a que se refiere el inciso tercero del artículo 55 de esta ley, el que señalará, además de las condiciones de urbanización, las normas urbanísticas aplicables a la edificación.

No requerirán permiso las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 55, ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo, las obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas, las de carácter policial de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las de carácter penitenciario, destinadas a sus fines propios, y las instalaciones del Banco Central de Chile destinadas a sus procesos de recepción y distribución de circulante, y de almacenamiento, procesamiento y custodia de valores, sean urbanas o rurales, no requerirán de los permisos a que se refiere el inciso primero de este artículo ni estarán sometidas a inspecciones o recepciones de ningún tipo por las Direcciones de Obras Municipales mientras tengan este carácter. En igual forma no les serán aplicables las limitaciones ni autorizaciones establecidas en el artículo 55. Estas excepciones se extenderán igualmente, a las demás obras ubicadas dentro del mismo predio en que se emplacen las construcciones a que se refiere este inciso, aun cuando estén destinadas a su equipamiento o al uso habitacional. Todas estas obras deberán ajustarse a las Normas Técnicas, a la Ordenanza General y al Plan Regulador respectivo, en su caso. Concluidas las obras, el propietario deberá presentar una declaración ante la Dirección de Obras Municipales, indicando el destino de las edificaciones e individualizando a las personas a quienes pudiere corresponder algún grado de responsabilidad de conformidad a los artículos 17 y 18 de esta ley.

El Director de Obras Municipales concederá el permiso o la autorización requerida si, de acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas, previo pago de los derechos que procedan, sin perjuicio de las facilidades de pago contempladas en el artículo 128.

Se entenderá por normas urbanísticas aquellas contenidas en esta ley, en su Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones, en lo relativo a los usos de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y áreas de riesgo o de protección.

La Dirección de Obras Municipales, a petición del interesado, emitirá un certificado de informaciones previas que contenga las condiciones aplicables al predio de que se trate, de acuerdo con las normas urbanísticas derivadas del instrumento de planificación territorial respectivo. El certificado mantendrá su validez mientras no se modifiquen las normas urbanísticas, legales o reglamentarias pertinentes. Los certificados de informaciones previas que se otorguen respecto de los lotes resultantes de subdivisiones afectas y loteos con urbanización garantizada mantendrán su vigencia mientras no se modifiquen el plano de subdivisión, loteo o urbanización, o las normas urbanísticas legales o reglamentarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán someterse a la aprobación del Director de Obras Municipales, anteproyectos de loteo, de edificación o de urbanización. El anteproyecto aprobado mantendrá su vigencia respecto de todas las condiciones urbanísticas del instrumento de planificación territorial respectivo y de las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones consideradas en aquél y con las que se hubiere aprobado, para los efectos de la obtención del permiso correspondiente, durante el plazo que determine la misma Ordenanza.

La Dirección de Obras Municipales deberá publicar en la plataforma digital dispuesta al efecto y en el sistema de información regulado por la ley de transparencia del mercado del suelo las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo, en un plazo que no debe exceder los tres días hábiles desde su otorgamiento. Asimismo, deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina de dichas resoluciones, debiendo, además, informar mediante carta y/o correo electrónico adjuntando copia de tales actos administrativos al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos.

Los permisos y certificados que deba otorgar el Director de Obras Municipales a que se refiere esta ley, deberán tramitarse en forma electrónica, sobre la base de una plataforma digital.

A través de la misma plataforma deberán tramitarse los reclamos que puedan presentarse ante la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en contra de los actos de las Direcciones de Obras Municipales.

La plataforma a que se refieren los incisos anteriores deberá entregar, en formato de datos abiertos, información acerca de la cantidad y tipo de solicitudes que se presenten en cada Dirección de Obras, su tiempo de tramitación y la identidad de los solicitantes.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, en los casos en que dicha plataforma presente problemas técnicos y no sea posible realizar la tramitación por esa vía, la Dirección de Obras Municipales deberá arbitrar las medidas necesarias para poder informar y notificar a los interesados en el respectivo procedimiento.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaborará un Reglamento que regulará el funcionamiento, uso y mantención de la plataforma digital a que se refiere este artículo.

ANEXO II

ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES

Artículo 26.- Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará, conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del negocio, para los efectos del artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior.

La municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez que el contribuyente hubiere acompañado todos los permisos requeridos o la municipalidad hubiere verificado por otros medios el cumplimiento de aquellos, tanto de orden sanitario, como de emplazamiento según las normas de zonificación del Plan Regulador, de otros permisos que leyes especiales les exigieren, según sea el caso, y siempre que no sea necesario verificar condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de patentes de profesionales y patentes de sociedades de profesionales, no se exigirá permiso alguno. Las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a la microempresa familiar.

Con todo, sus actividades deberán sujetarse a lo dispuesto por el D.S. N° 977, de 1997, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se entenderá por microempresa familiar aquella que reúna los siguientes requisitos:

- a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa habitación familiar;
- b) Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la familia, y
- c) Que sus activos productivos, sin considerarse el valor del inmueble en que funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento.

La microempresa familiar señalada en el inciso segundo podrá desarrollar cualquier actividad económica lícita, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas.

Para acogerse a los beneficios señalados, a los contemplados en los artículos 22 y 84 del D.L. N° 824, de 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta, en los artículos 29 y siguientes del D.L. N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y demás que favorezcan a la microempresa, el interesado deberá inscribirse en la municipalidad respectiva y acompañará una declaración jurada en la que afirme que es legítimo ocupante de la vivienda en que se desarrollará la actividad empresarial y que su actividad no produce contaminación. Si la vivienda es una unidad de un condominio, deberá contar con la autorización del Comité de Administración respectivo.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo, la municipalidad deberá otorgar de manera inmediata patente provisoria por un plazo de dos años, pudiendo los establecimientos comenzar a funcionar desde su otorgamiento. Para el otorgamiento de la patente provisoria se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador; b) Autorización sanitaria, en aquellos casos en que ésta sea exigida en forma expresa por el decreto con fuerza de ley N°1, del Ministerio de Salud, de 1989; c) Para el caso de actividades que requieran autorización sanitaria de aquellas que no se encuentren señaladas en el precitado decreto con fuerza de ley, el contribuyente sólo deberá acreditar haber solicitado la autorización correspondiente a la autoridad sanitaria.

Si transcurrido el plazo de dos años, contado desde el otorgamiento de la patente provisoria, los contribuyentes no cumplen con todas las exigencias que las disposiciones legales determinen para su funcionamiento, la Municipalidad deberá decretar la clausura del establecimiento.

En el caso que se otorgue una patente provisoria para el ejercicio de las actividades que deban cumplir con el requisito señalado en la letra b) del inciso quinto, se podrá eximir la exigencia de la autorización correspondiente, siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto. Las municipalidades sólo podrán incorporar en dicha ordenanza los tipos de actividades previamente autorizadas por la autoridad competente, la que deberá señalar, además, las características y condiciones que aquellas deben cumplir. Las municipalidades deberán exigir el cumplimiento del requisito de que se trate dentro del plazo de vigencia de la patente provisoria.

En caso de que se rechazare la solicitud de autorización sanitaria a que se refiere la letra c) del inciso quinto o se rechazaren los permisos señalados en los incisos precedentes o hubiere vencido el plazo otorgado por la municipalidad para obtenerlos, la patente provisoria caducará de pleno derecho, debiendo el contribuyente cesar de inmediato sus actividades.

Cuando la actividad que vaya a realizar el contribuyente exigiere la verificación de condiciones de funcionamiento por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad, esta verificación se hará dentro de los treinta días corridos siguientes al otorgamiento de la patente provisoria, debiendo manifestar la Dirección, dentro de dicho plazo, la existencia de observaciones y condiciones que deban cumplirse para otorgar la patente definitiva. En caso de que hubiera transcurrido el plazo antes señalado y la municipalidad no hubiera concurrido, o habiendo concurrido no encontrare observaciones, la patente extendida provisoriamente se convertirá por el solo ministerio de la ley en definitiva, siempre que se hayan obtenido los permisos sanitarios correspondientes, debiendo la municipalidad extender la patente definitiva si fuere requerida al efecto. Asimismo, si existieren observaciones y éstas fueran subsanables, podrá la municipalidad declarar que la patente provisoria mantendrá dicho carácter por el tiempo que la Dirección de Obras le señale para cumplir con las exigencias que las disposiciones legales determinen, plazo que no podrá exceder de un año desde que la patente provisoria hubiere sido extendida. Asimismo, si las observaciones no fueren subsanables, o no hubieren sido subsanadas dentro del plazo dado por la municipalidad, la patente caducará de pleno derecho. Para los efectos de la clausura, la municipalidad podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en caso de que la causa que impidiera subsanar las observaciones fuere la existencia de una declaratoria de utilidad pública sobre el inmueble en que haya de realizarse la actividad de que se trate, y la Dirección de Obras Municipales haya negado la solicitud efectuada por el propietario según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 121 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, la municipalidad deberá prorrogar la patente provisoria hasta que se cumpla el plazo de caducidad de dicha declaratoria. Al plazo anteriormente indicado deberá adicionarse, si fuere el caso, el plazo que la Dirección de Obras Municipales haya otorgado para subsanar las observaciones que haya efectuado, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior.

En caso de que la autorización sanitaria se haya obtenido en forma tácita, en aplicación de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 7° del Código Sanitario, el contribuyente que solicita la patente deberá acompañar una declaración jurada indicando que la autoridad sanitaria no se pronunció dentro del plazo legal y acompañar además el documento que acredite haber hecho la solicitud sanitaria de que se trata. Al que falseare la información a que se refiere este inciso o no cesare sus actividades cuando la patente hubiere caducado se le aplicarán las sanciones establecidas en el Título X de esta ley, sin perjuicio de las demás que sean aplicables por realizar declaraciones juradas falsas y por el incumplimiento de las normas sanitarias.

En los casos de los incisos anteriores y para empresas que acrediten que su capital efectivo no excede de cinco mil unidades de fomento, las municipalidades podrán eximir del pago de las patentes provisorias u otorgar plazos para el pago de las mismas, de hasta doce cuotas mensuales reajustables. Las condiciones para otorgar exenciones o facilidades de pago de patentes provisorias se definirán a través de ordenanzas, las que en ningún caso podrán establecer diferencias arbitrarias entre beneficiarios que desarrollen la misma actividad económica o que participen en el mismo sector o zona geográfica.

La exención corresponderá al año que dure la patente provisoria.

